



Universidad
de Alcalá

LAS DILACIONES INDEBIDAS

THE UNDUE DELAY

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

Don **RUBÉN HERRAIZ SIERRA**

Dirigido por:

Doctor Don **ESTEBAN MESTRE DELGADO**

Alcalá de Henares, a 22 de abril de 2021

RESUMEN

La tardanza en la obtención de un pronunciamiento por parte de los Tribunales puede dar lugar a la vulneración del artículo 24 de la Constitución Española (CE), tanto en su apartado primero, en el cual se regula el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, como en su apartado segundo, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a un proceso público y sin dilaciones indebidas, junto con sus garantías.

Este trabajo de fin de máster se centrará en las dilaciones indebidas, concepto jurídico indeterminado y de entendimiento negativo, por consiguiente, todo lo relacionado con un proceso que se ve indebidamente prolongado en el tiempo, causando un perjuicio.

Este derecho a un proceso sin dilaciones indebidas fue contemplado por primera vez por parte del Tribunal Constitucional en su Sentencia 24/1981, de 14 de julio. La doctrina ha construido los criterios que se deben tener en cuenta para la apreciación de la vulneración de dicho derecho, no siendo suficiente la demora en el tiempo.

La apreciación de la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas podrá conllevar la responsabilidad patrimonial del Estado a consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Palabras clave: *Daño por lesión de derechos. Demora en la tramitación de un procedimiento judicial. Dilaciones indebidas. Plazo razonable. Responsabilidad patrimonial.*

ABSTRACT

The delay in obtaining a ruling by the Courts may lead to the violation of article 24 of the Spanish Constitution (SC), both in its first section, which regulates the right of all citizens, to effective judicial protection, as in its second section, that recognizes the right of all citizens to a public process and without undue delay, together with its guarantees.

This master's thesis will focus on undue delays, an indeterminate legal concept and negative understanding, that occurs when a process is prolonged in time, causing damage.

This right to a trial without undue delay was considered for the first time by the Constitutional Court in its STC 24/1981, of July 14. The doctrine has built the criteria that must be considered for the appreciation of the violation of said right, not being sufficient the delay in time.

The appreciation of the violation of the right to a trial without undue delay may entail the patrimonial responsibility of the State as a result of the abnormal functioning of the Administration of Justice.

Key words: *Damage for infringement of rights. Patrimonial responsibility. Reasonable time. Slowness in the processing of a judicial file. Undue delay.*

ÍNDICE

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
I. INTRODUCCIÓN	7
II. CONCEPTO DE DILACIONES INDEBIDAS	8
III. UBICACIÓN LEGAL DEL DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS	11
III.1. Regulación nacional	11
III.2. Regulación internacional	15
IV. CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE DILACIONES INDEBIDAS	15
IV.1. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos	15
IV.2. Clasificación de elementos habitualmente utilizados	22
A) <i>Complejidad del asunto</i>	22
B) <i>Conducta del recurrente o demandante</i>	23
C) <i>Conducta de las autoridades. Medios disponibles</i>	24
D) <i>Transcurso del tiempo. Plazos procesales. Periodos de inactividad</i>	25
E) <i>Consecuencias para el recurrente</i>	26
V. ANÁLISIS DE LA DOCTRINA NACIONAL	28
VI.1. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional	29
VI.2. Pronunciamientos del Tribunal Supremo	31
VI. DISTINTAS RESPUESTAS A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO	34
VII. ATENUANTE ANALÓGICA	38
VII.1. Los Acuerdos de los Plenos no Jurisdiccionales del Tribunal Supremo	40
VII.2. Interpretación de la redacción legal de la atenuante	42
VII.3. Apreciación de la atenuante en la modalidad de muy cualificada	44
VII.4. Compensación de la culpabilidad por el hecho	46
A) <i>Compensación constructiva</i>	47
B) <i>Compensación destructiva</i>	48

VIII. ALGUNOS DATOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR EL ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA	48
IX. CONCLUSIONES	54
X. BIBLIOGRAFÍA	56
XI. LEGISLACIÓN	57
XII. JURISPRUDENCIA	58
XI. ANEXOS	60

LISTADO DE ABREVIATURAS

ATS	Auto del Tribunal Supremo
CDFUE	Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos
CP	Código Penal
LECrím	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO	Ley Orgánica
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas de la justicia en España es su lentitud en la tramitación de los procedimientos, lo que conlleva que se alarguen, en muchos casos, durante años, sin una justificación. Estas dilaciones en el tiempo provocan un daño, que deberá ser evaluable y, si da lugar, será resarcido por la administración estatal.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se encuentra reconocido en nuestra Constitución en el art. 24.2. Derecho que, aun estando dotado de especial protección, al considerarse como fundamental, es reiteradamente vulnerado, siendo la jurisprudencia de los diferentes Tribunales la que se ha encargado de crear y establecer los requisitos para ser reconocido.

La selección del tema objeto de estudio, se ha debido al conocimiento de diferentes casos de personas que se podrían considerar víctimas, del anormal funcionamiento de la administración de justicia, con motivo de una larga duración en la tramitación de los procedimientos, principalmente, en el ámbito penal, alargándose la fase de instrucción durante años, superando el plazo, que la doctrina considera como razonable, para el reconocimiento de las dilaciones como indebidas. Habiéndose obtenido pronunciamientos diferentes, por parte de los Tribunales, al tener en cuenta la vulneración de este derecho.

El objetivo del presente trabajo es buscar una respuesta a la vulneración de este derecho fundamental, para ello se analizan los criterios que se han tenido en cuenta para determinar la existencia de dilaciones indebidas, tanto a nivel internacional, a través de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Igualmente se han analizado las distintas respuestas a la vulneración de este derecho, como las consecuencias para la Administración estatal, al ser considerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas vulnerado.

II.- CONCEPTO DE DILACIONES INDEBIDAS

El concepto de dilaciones indebidas se refiere al tiempo excesivo empleado en los procesos para llevar a cabo una resolución judicial, que en muchas ocasiones puede afectar de forma directa a quienes deben verse amparados por este derecho fundamental, pudiendo influir en el destino de un proceso, siendo lo relevante el retraso en la tramitación, no su incidencia en el resultado del proceso.

El Tribunal Constitucional define el derecho a la tutela judicial efectiva señalando que:

“no puede entenderse como algo desligado del tiempo, sino que ha de otorgarse por los órganos judiciales dentro de los razonables términos temporales en que las personas reclaman esa tutela judicial de sus derechos en intereses legítimos”¹.

Atendiendo al estudio de Juan José Toscano Tinoco, se observa entre los pronunciamientos del Tribunal Constitucional el siguiente:

“Las dilaciones indebidas se definen como un concepto jurídico indeterminado o abierto, del que se dice que no se identifica con el mero transcurso de los plazos procesales y que es equivalente al plazo razonable a que se refiere el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”².

Se trata por tanto de:

“Un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que

¹ Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 1981, recurso de inconstitucionalidad nº25/191.

² TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas: una cuestión no resuelta. Evolución jurisprudencial, regulación legal y visión crítica*, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, nº X, 2013, p. 248.

no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes”³.

La Real Academia de la Lengua Española define cada una de las palabras que compone este concepto como:

1. Dilación: «Demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo».
2. Indebido/a: «Ilícito, injusto y falto de equidad».

Las definiciones mencionadas sirven a los autores para elaborar un concepto propio de lo que entienden por dilaciones indebidas, siendo muchas las definiciones que se han venido dando con el paso de los años con la elaboración de sentencias y doctrina del Tribunal Constitucional, destacando la de Vicente Gimeno Sendra:

“En una primera aproximación, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas puede concebirse como un derecho subjetivo constitucional, de carácter autónomo, aunque instrumental del derecho a la tutela, que asiste a todos los sujetos del Derecho Privado que hayan sido parte de un procedimiento judicial y que se dirige frente a los órganos del Poder Judicial, aun cuando en su ejercicio han de estar comprometidos todos los demás poderes del Estado, creando en él la obligación de satisfacer dentro de un plazo razonable las pretensiones y resistencias de las partes o de realizar sin demora la ejecución de las sentencias”⁴.

³ STS de 1 de febrero de 2011.

⁴ REQUEJO PAGÉS, José Luis, *Constitución y Proceso*, de Vicente Gimeno Sendra, Revista Española de Derecho Constitucional, nº25, 1989, pp. 219-227.

No es un concepto vacío de contenido, cuya vulneración no acarree consecuencias, pues aparece configurado como *derecho subjetivo*⁵, y como un *derecho constitucional*⁶, provocando así el nacimiento de la facultad de reclamar a los poderes públicos que ejerciten las actividades necesarias para superar los obstáculos que impidan se desarrolle el proceso “*en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en los que los intereses en conflicto puedan recibir una pronta y rápida satisfacción*”⁷.

El derecho a un “*procedimiento diligente*”, a un juicio expedito, constituye una de las garantías de la Bill of Rights americana y de muchas constituciones de los Estados de la Unión⁸.

Así mismo, las dilaciones indebidas son, como señala la STC de 11 de junio de 1996:

“Una expresión constitucional que encierra un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz de determinados criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, porque tal derecho no se identifica con la duración global de la causa, ni aun siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales”.

En el Capítulo IV del presente estudio, observaremos los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado para apreciar su vulneración.

⁵ FERNÁNDEZ VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido, *Las dilaciones indebidas en el proceso de su incidencia sobre la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social*. Revista del Poder Judicial nº. 24, 1993, p. 47.

⁶ GIMENO SENDRA, Vicente, *Manual de Derecho Procesal Penal*, Madrid, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2015, p. 96.

⁷ MORENO MILLÁN, Carlos, *El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas*. Revista Procuradores, marzo-abril 1993, pág. 37.

⁸ VIVES ANTON, Tomás Salvador, *Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. II. La Reforma del Proceso Penal*. Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, pp. 41 y ss.

III.- UBICACIÓN LEGAL DEL DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS

Antes de proceder a un análisis jurisprudencial, es preciso enmarcar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas dentro de los tratados internacionales que lo regulan, así como profundizar en la legislación española vigente que lo contiene.

III.1. Regulación nacional

Siguiendo el manual de estudio de Vicente Gimeno Sendra, se observa que las fuentes del Derecho Procesal Penal vienen integradas por la Constitución Española, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las Leyes Especiales⁹.

III.1.1- *La Constitución Española*

Dentro de la vigente Constitución española de 1978, las normas constitucionales de naturaleza procesal pueden sistematizarse en *ordinarias* o de *garantía reforzada*, siendo éstas últimas las *tuteladoras de los derechos fundamentales de naturaleza procesal*¹⁰.

III.1.1. A). - *Normas constitucionales procesales de garantía reforzada*

“La vulneración de estas normas puede ser restablecida por los tribunales ordinarios y, si no lo hicieren, estará autorizado el particular a interponer el recurso constitucional de amparo y obtener su restablecimiento del Tribunal Constitucional”¹¹.

La delimitación de estas normas la efectúa el art. 53.2 CE, en cuya virtud tan sólo la infracción de los derechos fundamentales de incidencia procesal puede hacerse valer

⁹ GIMENO SENDRA, Vicente, *Manual de Derecho Procesal Penal ... op. cit.*, p. 45.

¹⁰ *Ídem.*

¹¹ *Ídem.*

mediante el recurso de amparo. Dichos derechos fundamentales se encuentran ubicados en la Sección 1ª del Capítulo II de la Constitución pudiendo sistematizarse en¹²:

- a) Derechos fundamentales materiales de incidencia procesal
- b) Derechos fundamentales procesales.

Son los *Derechos fundamentales procesales* los que ostentan un interés particular para el objeto del presente estudio, pues *“los derechos fundamentales procesales se encuentran ubicados principalmente en el art. 24, si bien existen algunos otros derechos procesales, como lo son los derechos singulares del detenido (...) que se prevén en el art. 17”*¹³.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se encuentra reconocido constitucionalmente en el art. 24.2 de la Constitución Española en la siguiente redacción:

*“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”*¹⁴.

Cabe mencionar que en este mismo precepto legal aparece recogido *“El derecho a un proceso con todas las garantías”*,

*“siendo su función otorgada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la de erigirse en una especie de cajón de sastre en el que tienen cabida todos los derechos fundamentales de incidencia procesal (...), y muy especialmente en los derechos a la tutela, de defensa y a la presunción de inocencia”*¹⁵.

¹² *Ibídem*, p. 46.

¹³ *Ídem*.

¹⁴ Constitución Española de 1978 (BOE de 29 de diciembre de 1978).

¹⁵ GIMENO SENDRA, Vicente, *Manual de Derecho Procesal Penal ...op. cit.*, p. 75.

III.2. Regulación internacional

Los Tratados internacionales constituyen una fuente de producción del Derecho Procesal Penal. De dichos Tratados cabe destacar, por su superior fuerza vinculante, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos¹⁶ en la medida en que, dispone el art. 10.2 CE:

“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”¹⁷.

En virtud de lo establecido en el art. 10.2 CE, la jurisprudencia del TEDH:

“constituye una doctrina jurisprudencial que ha de ser observada por todos nuestros tribunales (...) Muchas de las Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, en materia procesal penal, se fundan o responden a una jurisprudencia previa del TEDH”¹⁸.

III.2. 1. Art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH):

“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, pública y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (...)”¹⁹.

Respecto al plazo razonable, señala Juan José Toscano que:

¹⁶ *Ibídem*, p. 47.

¹⁷ Constitución Española ...*op. cit.*, art. 10.2.

¹⁸ GIMENO SENDRA, Vicente, *Manual de Derecho Procesal Penal* ...*op. cit.*, p. 48: “...como por ejemplo la doctrina del TC sobre la prohibición de valoración de las pruebas personales por los Tribunales de la segunda instancia”.

¹⁹ Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en Roma de 4 de noviembre de 1950 (BOE de 10 de octubre de 1979).

“En el caso Eckle contra Alemania, sentencia de 15 julio de 1982, se señala que, en materia penal, el «plazo razonable» del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, comienza en el instante en que una persona se encuentra «acusada»; puede tratarse de una fecha anterior al inicio del proceso, como concretamente la fecha del arresto, de la inculpación o de la apertura de investigaciones preliminares”²⁰.

Por su parte, Vicente Gimeno Sendra apunta a la doctrina de la integración elaborada por el TC y el TEDH, por la que:

“...el concepto de plazo razonable ha de ser integrado en cada caso concreto mediante el examen de la naturaleza y complejidad del asunto y del comportamiento del recurrente...”²¹.

III.2. 2. Art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (PIDCP):

“Toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a ser juzgado sin dilaciones indebidas”²².

Se corresponde con:

“el Beschleunigungsgebot, formulado positivamente como aceleración, en cierto modo eficacia, que se manifiesta entre otras en la Konzentrationsmaxime, y en EEUU con el speedy trial recogido en la VI Enmienda a la Constitución, aplicable a los Estados miembros en virtud de la XIV Enmienda acerca de la Due Process Clause. En el marco federal norteamericano esta garantía se ha concretado en la Federal Speedy Trial Act de 1974”²³.

²⁰ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit*, p. 247.

²¹ GIMENO SENDRA, Vicente, y DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel., ...*op. cit*, pp. 485-486.

²² Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 (BOE de 30 abril de 1977).

²³ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit.*, p. 241.

III.2. 3. Art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE):

“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de forma equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un Juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar”²⁴.

IV.- CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR LA DE EXISTENCIA DE DILACIONES INDEBIDAS

Para valorar dicho derecho, es preciso analizar la jurisprudencia del TEDH, que ha venido concretando los requisitos y circunstancias que determinan la existencia de la vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.

IV.1.- Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Apuntaba José Ignacio Prieto Rodríguez que, las expresiones «dilaciones» o «plazo» utilizadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aparecen limitadas, debiendo unir a las mismas las expresiones de «indebidas» o «razonables»²⁵. Es por ello que nace la imperiosa necesidad de encontrar elementos que puedan ser decisivos para determinar si se ha producido menoscabo en algún derecho, pues la tardanza justificada no conlleva la lesión del mismo.

El Tribunal Constitucional asume en su mayoría la doctrina del TEDH que establece cómo *“el carácter razonable de la duración de los procedimientos debe ser apreciado en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias particulares del mismo”²⁶.*

En mismo sentido señala el TEDH que,

²⁴ Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (BOE de 30 de marzo de 2010).

²⁵ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, *Dilaciones indebidas y Derecho Penal (causas y remedios. Crítica a las soluciones Jurisprudenciales arbitrales*, Madrid, Ed. Akal/iure, 1997, p. 32.

²⁶ STEDH de 27 junio de 1988, caso Neumeister; STEDH de 13 julio de 1983, caso Zimmerman y Steiner.

“El carácter razonable de la duración del procedimiento se aprecia atendiendo a las circunstancias de la causa habida cuenta de los criterios consagrados por la jurisprudencia del Tribunal, en particular la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y el de las autoridades competentes”²⁷.

La STEDH de 20 febrero de 1991 (caso VERNILLO) subraya respecto al plazo razonable que, *“el Convenio señala la importancia que se atribuye a que la Justicia no sea administrada con retrasos propios para comprometer su eficacia y credibilidad”*.

El deber de agilizar en el tiempo el proceso, comprende todas las fases del mismo: desde la inculpación o detención de una persona hasta la decisión y ejecución de Sentencia firme, es decir, no se concreta en una fase del procedimiento en exclusiva.

La obligación judicial de agilizar e impulsar de oficio este camino desde las primeras actuaciones, aparece recogido en nuestras leyes procesales:

Art. 202 LECrim: *“(...) Serán improrrogables los términos judiciales cuando la Ley no disponga expresamente lo contrario”²⁸.*

Así, queda también recogido en las leyes procesales el inicio de la imputación del hecho delictivo, al inculpado, posibilitando desde ese mismo instante su defensa,²⁹:

Art. 118.2 LECrim: *“El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena. El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá*

²⁷ STEDH de 23 octubre de 1990, caso Moreira de Azevedo contra Portugal.

²⁸ Real Decreto de 14 de septiembre, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE de 17 de septiembre de 1977).

²⁹ *Ibidem*, Artículo 118.2.

comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus declaraciones, así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos”.

Atendiendo al artículo 324 LECrim, señala cómo, en el caso de no concluir el Juez de Instrucción el sumario desde su incoación en plazo, éste, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por períodos iguales o inferiores debiendo exponer de forma razonada en el auto las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo y concretar las diligencias necesarias para llevar la investigación a cabo³⁰.

La declaración de procesamiento debe dictarse tan pronto concurren indicios racionales de criminalidad contra una determinada persona, pudiendo el procesado, desde el mismo momento en que tenga dicha condición, instar la pronta terminación del sumario³¹.

Atendiendo a la LECrim y al comentario de José Ignacio Prieto,

“En el ámbito del procedimiento abreviado, la norma de celeridad alcanza cotas difícilmente justificables y frecuentemente irrespetuosas con el derecho de defensa, hasta el punto de preverse la posibilidad de inexistencia de fase judicial de instrucción, saltando desde la Comisaría a la fase intermedia o incluso desde el Juzgado de Guardia al señalamiento de juicio oral en el juicio rápido”³².

En la fase de diligencias previas, de practicarse las diligencias pertinentes, habrán de hacerse “sin demora”, como se desprende del art. 779.1 LECrim.

³⁰ *Ibidem*, Artículo 324.

³¹ *Ibidem*, Artículo 384.

³² PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, *Dilaciones indebidas...op.cit.*, p. 33.

Por su parte, la Ley del Tribunal del Jurado recoge que el *“riesgo de prolongación excesiva del acto del juicio aconseja la introducción de mecanismos de simplificación. De ellos el más esencial es la precisa definición del objeto del enjuiciamiento que habrá de efectuarse en la fase precedente al mismo”*³³. El cuidado del Legislador por acelerar este proceso se manifiesta teniendo preferencia el juicio oral ante el Tribunal del Jurado frente a cualquier otro señalamiento o actuación procesal sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar:

*“La celebración del juicio oral requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Este último estará a disposición del Tribunal del Jurado hasta que se emita el veredicto, teniendo el juicio oral ante este Tribunal prioridad frente a cualquier otro señalamiento o actuación procesal sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar”*³⁴.

La protección y el mandato de rapidez no concluyen con la Sentencia firme, dilatándose hasta alcanzar la etapa de ejecución, pues

*“Una demora injustificada en la ejecución de la pena puede afectar al éxito del tratamiento penitenciario que pretenda operarse y puede éste resultar contrario a la reeducación y reinserción”*³⁵.

Por tanto, la duración no puede ser interpretada en términos restrictivos, sin perjuicio de los paréntesis o los estancamientos temporales atribuibles únicamente al inculcado o a la persona perjudicada.

El proceso ha de ser contemplado en su totalidad porque

“un retraso en una de las fases no se traduce necesariamente en un retraso de todo el procedimiento. Puede tramitarse la fase siguiente más

³³ Exposición de Motivos de la L.O 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

³⁴ *Ibídem*, art. 44.

³⁵ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, *Dilaciones indebidas... op. cit.* p. 34.

rápidamente. Mas la acumulación de tardanzas en diferentes niveles puede explicar la lentitud del conjunto del proceso”³⁶.

Si se puntualiza el inicio y final, se podrá delimitar para el período computable, lo que supone, en primer lugar, establecer los límites del procedimiento desde la perspectiva del afectado, que nacerá desde que sufra las consecuencias del hecho o desde la inculpación:

“Si para la víctima puede estimarse que comienza desde la comisión de la infracción, para la policía no comenzará hasta que le sea comunicada o principalmente hasta que pueda investigar el asunto; para el reo hasta el momento de su inculpación y/o su arresto; para la justicia hasta que recibe el expediente por denuncia o por la policía (...) Desde el punto de vista de la legitimación y eficacia de la justicia, el período a considerar no es sólo el tratamiento judicial de la causa, sino el proceso valorado en su conjunto desde la comisión de la infracción hasta la ejecución de la pena e indemnización de las víctimas”³⁷.

Así pues, la doctrina del TEDH, determina que el **plazo razonable** empieza a contarse a partir del momento en que una persona se encuentra acusada “*habiendo optado el Tribunal por una concepción material y no formal de la acusación*”³⁸.

El Tribunal Supremo parte del comienzo de las actuaciones policiales:

“El término, a partir del cual se debe comprobar si se ha dado cumplimiento al mandato constitucional de juzgar sin dilaciones indebidas, comienza con el momento de inculpación de una persona, lo que significa en el momento de dirigirse contra él una investigación

³⁶ THOMAS FELTES, Michael Alex, *Delays in the Criminal Justice System – Causes and Solutions*. Council of Europe, *Criminological Research*, Vol. XXVIII, Estrasburgo, 1992, p. 57.

³⁷ LAFFARGUE, Bernard, y GODEFROY, Thierry, *La situation dans les pays européens du point de vue des lenteurs de la justice en ce que concerne les adultes*. En obra colectiva «Lenteurs danse le système de justice pénale» *Editions du Conseil de l'Europe*, Estrasburgo, 1989, p. 19.

³⁸ STEDH de 15 de junio de 1982, caso Eckle. STS de 7 octubre de 1992 sitúa el momento inicial en la notificación al querellado de la interposición de la querrela.

criminal en la forma de diligencias de investigación que pueden acabar con su sometimiento al juicio”³⁹.

El TEDH, entiende el **término inicial** con la sustentación de la acusación si es **penal**⁴⁰, con fecha del reconocimiento por parte del Estado de la posibilidad de ejercitar el recurso individual⁴¹ y no con el arresto⁴².

En resumen, la doctrina de este Tribunal apunta que el período inicial,

“parte del momento en que el sometido a proceso penal tiene conocimiento o sufre consecuencias del reproche que la autoridad competente (no necesariamente judicial) le hace, por haber cometido una infracción penal”⁴³.

En virtud de la STEDH de 27 junio de 1968, caso WEMHOFF: *“El plazo razonable de duración de la causa, en materia penal, tiene por objeto que los acusados no permanezcan durante un tiempo muy largo bajo la implicación de una acusación y que decida sobre su fundamento”*.

Señala el Tribunal Supremo que:

“El plazo razonable empieza a contarse, a partir del momento en que una persona se encuentra acusada, habiendo optado el Tribunal por una concepción material y no formal de la acusación, de tal manera que (...) el plazo puede comenzar a computarse desde la notificación al querellado de la interposición de la querella”⁴⁴.

³⁹ STS de 14 diciembre de 1991.

⁴⁰ STEDH de 13 de julio de 1983, caso Zimmermann y Steiner.

⁴¹ STEDH de 10 diciembre de 1982, caso Coridiano.

⁴² STEDH de 25 junio de 1987, caso Baggetta.

⁴³ DÍAZ DELGADO, José, *La responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas en el funcionamiento de la Administración de Justicia*, Valencia, 1987, p. 79.

⁴⁴ STS de 7 de octubre de 1992

“A partir del momento en que una persona se encuentra acusada”⁴⁵.

“Comienza con el momento de la inculpación de una persona, lo que significa en el momento de dirigirse contra él una investigación criminal en la forma de diligencias de investigación (sumario o similares) que pueden acabar con su sometimiento a juicio”⁴⁶.

Respecto al ***término final***, como norma general, se ubica en la firmeza de la Sentencia, concluida la casación o apelación. El TEDH establece en las Sentencias de 16 de julio de 1971 (caso Ringei-Sen) y 15 de julio de 1982 (caso Eckle)⁴⁷ que, no puede considerarse cerrado el proceso hasta que se haya determinado exactamente la duración de la condena.

En el ***procedimiento civil*** y en los tramitados ante otros órganos jurisdiccionales, el “*plazo comenzará a correr desde que se plantee la demanda o ejercite la acción, entendido en sentido amplio*”⁴⁸. Así, cuando las reclamaciones administrativas previas sean obligatorias al ejercicio de acciones civiles ante la jurisdicción ordinaria, deberán incluirse en el cómputo cuyo fin se dará con la efectiva ejecución de la Sentencia⁴⁹.

Puede decirse que cuando se postule condena por dilaciones indebidas, vía amparo o vía demanda contra el Estado por vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, éstas pueden seguir dándose. Así mismo, no concurre razón alguna para excluir del cómputo la duración de estos procesos extraordinarios, como suscribe Javier Ignacio Prieto:

⁴⁵ STS de 18 de febrero de 1994.

⁴⁶ STS de 14 de diciembre de 1991.

⁴⁷ “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en el caso Eckle contra Alemania, de 15 de julio de 1982, admitió la posibilidad de que una atenuación de la pena acordada por los tribunales internos pudiera ser un modo de reparación del derecho reconocido en el artículo 6.1 del Convenio, pero vino a exigir que se hubiera examinado la concreta concurrencia de un plazo irrazonable para ser oída la causa, que así se examinara, indicara y declarara y que ello, en el caso concreto, pudiera estimarse como una reparación adecuada”, Juan José TOSCANO TINOCO, Las Dilaciones indebidas... op. cit. p. 255.

⁴⁸ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, *Dilaciones indebidas...* op. cit. p. 38, referencia a la STEDH de 10 julio de 1984, caso Guincho contra Portugal, estableció el plazo inicial con el planteamiento de la acción civil y no cuando el proceso entra en la segunda fase de ejecución.

⁴⁹ STEDH de 7 julio de 1989, caso SANDERS, S.A contra España.

“Si las pretensiones de los demandantes de amparo o por vulneración de derechos fundamentales y consiguientemente de las resoluciones que se dicten pueden afectar al fondo del asunto”⁵⁰.

Cabe señalar que, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, han sumido en su integridad los criterios utilizados por el Tribunal Europeo.

IV.2.- Clasificación de elementos habitualmente utilizados

Se destacan a continuación los elementos habitualmente utilizados, para la determinación de las dilaciones en el tiempo, admitiendo la siguiente clasificación⁵¹:

A) *COMPLEJIDAD DEL ASUNTO*

No merece el mismo trato temporal la simple reclamación de cantidad que un procedimiento concursal; un simple juicio verbal que un procedimiento de mayor cuantía que permita el planteamiento de excepciones dilatorias; un procedimiento penal con lesiones de escasa entidad que otro en el que resulte preciso un largo periodo para la plena curación.

De forma singular los procedimientos por delitos económicos, corrupción política y ecológicos revisten ya de por sí notoria dificultad, utilizada para justificar cierta demora, siempre que sea precisa. Esto conduce, en ocasiones, a una impunidad contraria al principio de igualdad en aplicación de una ley penal.

“La razonabilidad del plazo se mide en función de los remedios previstos legalmente. La no utilización de los mismos en forma y tiempo

⁵⁰ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, *Dilaciones indebidas ... op. cit.*, p. 38.

⁵¹ *Ibídem*, p. 40.

adecuados por parte del órgano judicial no entierra el reproche que proceda en caso de tardanzas procesales inadmisibles”⁵².

B) CONDUCTA DEL RECORRENTE O DEMANDANTE

Es inadmisibile que resulte beneficiario de las consecuencias de la declaración de vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas la persona que sin justificación alguna provoca la tardanza. Es decir, si es el afectado quien provoca intencionadamente el retraso, luego no podrá valerse de la vulneración para favorecerse⁵³. Dicha pretensión encerraría fraude de ley o procesal.

El comportamiento del recurrente que pretende valerse de distintos medios con el fin de retrasar el cauce natural del procedimiento se valora de forma negativa. Es ejemplo de lo anterior el art. 504.5 LECrim. en su segundo párrafo, señalando el mencionado precepto al computar los plazos máximos de duración de la prisión provisional que:

“Se excluirá, sin embargo, de aquel cómputo el tiempo en que la causa sufre dilaciones no imputables a la Administración de Justicia”.

Por todo ello, si las dilaciones indebidas son provocadas por quien luego pretende que se declare la vulneración, no puede resultar beneficiado en ningún caso siendo clara en este aspecto la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Art. 295 LOPJ: *“En ningún caso habrá lugar a la indemnización cuando el error judicial o el anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado”⁵⁴.*

C) CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES. MEDIOS DISPONIBLES

⁵² *Ibidem*, p. 41. Valorar el recurso a “los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo”, resulta fundamental, señala en referencia a la STS de 20 de septiembre de 1993.

⁵³ Al menos durante los plazos de paralización causados por el mismo.

⁵⁴ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 2 de julio de 1985).

La referencia a este criterio implicará la valoración de la actitud del órgano judicial, por lo que *“habrá que entrar a comprobar si el comportamiento del mismo fue el causante de las dilaciones indebidas”*⁵⁵.

La jurisprudencia del TEDH es determinante en este sentido y *“no pueden argumentarse eventuales lagunas de la Ley interna cuando se trata de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del art. 6.1 de la Convención”*⁵⁶.

Ello ha sido asumido en su integridad por nuestros Tribunales, apuntando el Tribunal Constitucional en Sentencia de 24 de noviembre de 1988, cómo el derecho que nos ocupa emboza naturaleza prestacional, lo que da lugar a:

“...que los Jueces y Tribunales deban cumplir su función jurisdiccional de garantizar la libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, evitando dilaciones indebidas que quebranten la efectividad de su tutela... Excluir... las que vengan ocasionadas en defectos de estructura de la organización judicial sería tanto como dejar sin contenido dicho derecho frente a esta clase de dilaciones”.

Es la autoridad judicial la encargada de impulsar de oficio en todo momento el desarrollo del procedimiento y también evitar los intencionados o negligentes retrasos de las partes intervinientes.

Lo expuesto anteriormente, conlleva la necesidad de proporcionar al aparato judicial de los suficientes medios humanos y judiciales. Es habitual la falta de previsión, notoria en primer lugar por la necesidad y procediéndose posteriormente a la creación de órganos judiciales que *“comienzan su labor, partiendo de un cúmulo intolerable de asuntos hasta la creación y puesta en funcionamiento del Juzgado tiene lugar de forma efectiva”*⁵⁷.

⁵⁵ ROMERO COLOMA, Aurelia María, *El artículo 24 de la Constitución Española: análisis y valoración*, Barcelona, Ed. Jurídicas Serlipost, 1993, p. 92.

⁵⁶ STEDH de 10 de octubre de 1984, caso Guindo.

⁵⁷ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, *Dilaciones indebidas ... op. cit.*, p. 48. Insiste el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 24 de noviembre de 1988, en ello: *“este deber judicial, impuesto por la*

D) *TRANSCURSO DEL TIEMPO. PLAZOS PROCESALES.*
PERIODOS DE INACTIVIDAD

El transcurso del tiempo constituye un dato objetivo relevante, sin otra referencia más que al concreto número de años durante los que se ha desarrollado el proceso. Es usual ver cómo en las sentencias del TEDH se aprecia la existencia de violación cuando el procedimiento ha durado ocho años, aunque existiese fuga del recurrente⁵⁸, cinco años y ocho meses⁵⁹ o seis años⁶⁰. Señala la STEDH de 25 de junio de 1987 (caso Milasi) que *“Un período de casi diez años no puede considerarse como consecuencia de una crisis transitoria”*. Por otro lado, es ese mismo paso del tiempo el que va a establecer el alcance del retraso, así como la posibilidad de que actúe la prescripción, cuando se excedan los plazos previstos en el art. 133 del Código Penal.

Los artículos 134 LEC. y 202 LECrim. establecen como principio el de improrrogabilidad de plazos, estando ambos preceptos, como toda disposición legal, destinados a su efectivo cumplimiento.

De este modo, el reiterado incumplimiento del plazo habitual otorgado a cada fase del procedimiento se traduce en una *“dilación global del proceso desproporcional”*⁶¹, además de que *“La suma de estos excesos temporales, a simple vista insignificantes, conllevará una Sentencia o resolución final tardía, alejada del hecho histórico o de la pretensión ejercitada”*⁶².

Pero ¿qué pasa con los períodos procesales en los que no se desarrolla actividad alguna? ¿Qué ocurre con esos tiempos durante los que no se realizan interrogatorios de testigos, se demora el resultado de una pericial porque no se recuerda su práctica o tiempos en los

constitución, no puede ser cumplido, cualquiera que sea el esfuerzo y la dedicación de los Jueces y Tribunales, si los órganos judiciales no disponen de los medios materiales y personales que sean necesarios para satisfacer el derecho de los litigantes a una pronta respuesta”.

⁵⁸ STEDH de 19 febrero de 1991, caso Girolani.

⁵⁹ STEDH de 19 de febrero de 1991, caso Maj.

⁶⁰ STEDH de 19 de febrero de 1991, caso Mori.

⁶¹ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio., *Dilaciones indebidas ... op. cit.*, p.51.

⁶² *Ídem*.

que ni se investiga, ni se instruye, ni se juzga? Se estaría ante una paralización absoluta del proceso.

La STS de 7 de octubre de 1992, estima la vulneración por no haber constancia

“de la existencia de una situación excepcional (...) y es clamativo, por el contrario, los doce años que llevó su tramitación con períodos de inamovilidad debido a la inactividad de las autoridades judiciales”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *“repara más en los denominados tiempos muertos que en el plazo total de duración de los procesos”*⁶³.

E) CONSECUENCIAS PARA EL RECORRENTE

En el caso que nos ocupa el presente trabajo, las resoluciones tardías devendrán de manera eventual contraproducentes, o impondrán al afectado penas destinadas a un fin retributivo y perjudiciales, desde el punto de vista de la prevención especial.

Así, señala el Tribunal Supremo, el rechazo del retraso viene determinado en función del *“interés que en el proceso arriesga el demandante y las consecuencias que de la demora se causen a los litigantes”*⁶⁴.

Especialmente es en el proceso penal, por toda la incertidumbre y agonía que genera donde *“ha de exigirse con mayor rigor la razonabilidad de la duración del proceso”*⁶⁵ siendo *“en materia penal donde las exigencias son más rigurosas, pues están en entredicho valores o derechos que reclaman tratamiento preferente”*.⁶⁶

Se puede observar como la prolongación en exceso de la prisión provisional, el perjuicio laboral causado por el sometimiento al proceso aún encontrándose en libertad provisional, el sufrimiento en solitario o en familia hasta conocer la decisión, etc... todo ello provoca

⁶³ DÍAZ DELGADO, José, *La responsabilidad patrimonial ... op. cit.*, p. 93.

⁶⁴ STS de 20 de septiembre de 1993.

⁶⁵ STC de 4 de julio de 1988.

⁶⁶ STC de 23 de enero de 1985.

una angustia en el procesado generada por la inseguridad del exceso de duración del proceso.

Para el procesado, se verá afectado gravemente por la dilatada duración del proceso si ha sufrido una privación de libertad prolongada en exceso en el tiempo; si sufre por la tardanza de la resolución final y, si sus posibilidades de defensa se ven mermadas por la desaparición de documentos o la ausencia de testigos.

“Más allá de una alegación, la jurisprudencia exige la justificación concreta de los perjuicios derivados de la vulneración del derecho por la tardanza, en cuanto al daño moral”⁶⁷.

Para concluir este apartado, resume Javier Ignacio Prieto que:

*“La global y ponderada evaluación de los criterios apuntados permitirá concluir o no la existencia de dilaciones indebidas, dotando de esta forma a este concepto indeterminado de concreto contenido. También permitirá arbitrar los mecanismos precisos para evitar acontezcan nuevas tardanzas injustificadas por las mismas causas”*⁶⁸.

V.- ANÁLISIS DE LA DOCTRINA NACIONAL

Como se ha podido ver hasta ahora, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas se consagra en el art. 24.2 CE, conforme al cual las partes procesales tienen derecho a que su conflicto sea dilucidado judicialmente en un plazo razonable, sin que entre las actuaciones procesales intermedias entre el acto de iniciación y la sentencia final se sucedan dilaciones, retrasos o demoras que quepa calificar como “indebidas”.

En este sentido, resulta evidente que los términos “dilaciones indebidas” son:

⁶⁷ STS de 31 de enero de 1994.

⁶⁸ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, *Dilaciones indebidas ... op. cit.*, p.53.

“una expresión constitucional que encierra un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz de determinados criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, porque tal derecho no se identifica con la duración global de la causa, ni aun siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales”⁶⁹.

Nos encontramos ante un derecho fundamental de las partes procesales,

“cuyo correlato jurídico es la obligación que pesa sobre Jueces y Tribunales de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa un proceso”⁷⁰.

Para el Tribunal Constitucional, como apunta Juan José Toscano Tinoco,

“...el derecho es invocable en toda clase de procesos y, asimismo, en las sucesivas fases e instancias por las que discurre el proceso, incluida la ejecución de la sentencia”⁷¹.

Es la misma jurisprudencia del TC la que determina cuáles son los requisitos que han de darse para que pueda entenderse vulnerado el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, señalando a continuación algunos pronunciamientos del alto tribunal al respecto.

V.1.- Pronunciamientos del Tribunal Constitucional

⁶⁹ STC de 11 de junio de 1996.

⁷⁰ GARBERÍ LLOBREGAT, José; *Constitución y Derecho Procesal. Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal*, Ed. Civitas, Madrid, 2009, p. 275.

⁷¹ TOSCANO TINOCO, Juan José; *Las Dilaciones indebidas... op cit.* p. 248.

1º) Es necesario que en la tramitación del proceso haya sucedido una dilación, retraso o demora que no pueda ser justificada por la aplicación de alguna norma jurídica. Así, la jurisprudencia constitucional ha declarado que para determinar si la dilación es o no “indebida”, hay que atender a circunstancias objetivas tales como:

“...la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que en aquél arriesga el demandante, su conducta procesal y la conducta de las autoridades ”⁷².

2º) Que el proceso en el que se haya producido la dilación no haya finalizado, supuesto en el cual, y ante la imposibilidad de proceder a restablecer al afectado en la integridad de su derecho fundamental (porque, en suma, la dilación ya se ha producido y el tribunal no puede adoptar medida alguna que lo impida), al interesado sólo le quedaría “*acudir a la vía administrativa de la reclamación indemnizatoria frente al Estado por causa del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia*”⁷³.

3º) Resulta indispensable que la parte afectada haya invocado las dilaciones en el proceso, mediante requerimiento expreso de que cesen aquéllas, dirigido al órgano judicial supuestamente causante de dichas dilaciones:

“...requisito indispensable para que pueda estimarse vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es que el recurrente las haya invocado en el procedimiento judicial previo, mediante el requerimiento expreso al órgano judicial supuestamente causante de tales dilaciones para que cese en las mismas...”⁷⁴.

Pues como expresa la doctrina del TC,

⁷² STC de 23 de octubre de 2006.

⁷³ STC de 16 de abril de 2007.

⁷⁴ Ídem.

“...lejos de ser un mero formalismo, tiene por finalidad ofrecer a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse sobre la violación constitucional invocada, haciendo posible su reparación al poner remedio al retraso o a la paralización en la tramitación del proceso, con lo que se preserva el carácter subsidiario del recurso de amparo”⁷⁵.

De ello se deriva que,

“sólo en aquellos supuestos en los que, tras la denuncia del interesado (carga procesal que le viene impuesta como un deber de colaboración de la parte con el órgano judicial en el desarrollo del proceso), el órgano judicial no haya adoptado las medidas pertinentes para poner fin a la dilación en un plazo prudencial o razonable podrá entenderse que la vulneración constitucional no ha sido reparada en la vía judicial ordinaria”⁷⁶.

4º) La obligación de garantizar este derecho debe ser efectiva a pesar de que la dilación

“se deba a carencias estructurales de la organización judicial, pues no es posible restringir el alcance y contenido de este derecho, dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática, con base en distinciones sobre el origen de la dilación que el propio precepto constitucional no establece”⁷⁷.

5º) Cuando no pueda ser subsanado de otro modo, el remedio a las dilaciones indebidas puede consistir en un derecho indemnizatorio por los daños que la lesión produce⁷⁸.

Señala el profesor José Garberí Llobregat que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como su propio nombre indica,

⁷⁵ *Ídem.*

⁷⁶ *Ídem.*, (por todas v. SSTC de 18 de octubre de 2004 FJ 2; de 14 de marzo de 2005 FJ 12; de 26 de septiembre de 2005 FJ 12).

⁷⁷ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit.*, p. 250.

⁷⁸ *Ídem.*

“únicamente es reclamable en el ámbito de las actuaciones procesales que discurren entre Juzgados y Tribunales, no siéndolo, en cambio, en el marco de procedimientos administrativos”⁷⁹.

Hay que concluir que la resolución tardía satisface el derecho del art. 24.1 CE, o sea, el derecho a la tutela, pero esa misma resolución tardía no satisface el derecho a un proceso sin dilaciones del artículo 24.2 CE, concediendo por ello el Tribunal Constitucional el amparo por vulneración del derecho a un proceso en plazo razonable, aun en el caso de que, entre la interposición del recurso de amparo y la Sentencia de amparo, se haya acelerado el procedimiento o se haya dictado resolución demorada⁸⁰.

V.2.- Pronunciamientos del Tribunal Supremo

De los diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo en esta materia se puede extraer que el fin de la atenuante es minimizar el daño causado con una reducción de la pena establecida para el caso concreto.

Para resolver el problema, se inclinó en un primer momento por remitir a la vía del indulto y a la indemnización por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Posteriormente se optó por la aplicación de la circunstancia atenuante analógica por dilaciones indebidas⁸¹.

Dicha remisión al indulto y a la indemnización fue seguida mayoritariamente hasta 1997, y estuvo caracterizada por la carencia de previsión de soluciones legislativas directas en caso de concurrir dilaciones indebidas⁸².

“Esta solución, mantenida tras el dictado del Código Penal de 1995, recibió críticas de la doctrina por considerarla ajena al Poder judicial y dependiente de la voluntad política del gobierno de turno y, por lo

⁷⁹ GARBERÍ LLOBREGAT, José, *Constitución y Derecho Procesal...op. cit.*, p. 275.

⁸⁰ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit.*, p. 286.

⁸¹ *Ibidem.*, p. 240.

⁸² *Ibidem.*, p. 253, v. STS de 27 de enero de 1997, que aplicaba la doctrina bajo la vigencia del Código Penal de 1973.

tanto, un medio poco ortodoxo de restaurar la lesión de un derecho fundamental que se produce en el curso de un procedimiento judicial”⁸³.

Sin embargo, desde un punto de vista compensatorio, acudir a esta vía, era loable, en cierto modo, para los defensores de la simple compensación, pues suprimiendo total o parcialmente la pena, ese mal quedaba compensado con el que provendría de la ejecución de la pena impuesta⁸⁴.

El cambio de criterio trajo consigo discusión en el Tribunal Supremo, pues las razones contrarias a la aplicación del indulto se exponen por el magistrado Bacigalupo Zapater, en su voto particular a la sentencia de 6 de julio:

“En dicho voto particular señalaba que la remisión a la vía del indulto vulneraba, sin perjuicio de otras lesiones jurídicas, dos principios fundamentales del orden constitucional vigente: por un lado, el principio de la supremacía de la Constitución como norma jurídica y, por otro, el principio de la separación de poderes, dado que remitía a un Poder diverso del judicial la reparación de una lesión jurídica”⁸⁵.

La tutela ordinaria ha de otorgarse en el propio procedimiento judicial, sobre todo si la lesión se produce en la tramitación del mismo, mas de no obtenerse reparación, quedaría abierta la vía del amparo constitucional que precisamente exige, conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC), que se haya puesto de manifiesto la lesión ante el propio órgano judicial:⁸⁶

“Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

⁸³ *Ibidem.*, pp. 253-254.

⁸⁴ *Ídem.*

⁸⁵ *Ibidem.*, pp. 254-255.

⁸⁶ Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE 5 de octubre de 1979)

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello”.

En caso de vulneración, la fijación de las consecuencias ha de entenderse reservada al legislador, que es a quien constitucionalmente se encomienda tal función, no entendiéndose vulnerada la supremacía de la Constitución por el Poder Judicial al no arbitrar una solución ante un vacío legal, sin perjuicio de que se pueda acudir a las vías de integración previstas en el ordenamiento jurídico⁸⁷.

Llegando a la conclusión de que, si se entendiera que la vía legalmente prevista no fuera suficiente, ello no se convierte en título habilitante para crear una distinta al amparo de la vinculación directa de la Constitución, pues es la misma quien establece tal límite⁸⁸.

VI.- DISTINTAS RESPUESTAS A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO

El retraso en la tramitación del procedimiento puede obedecer a varias razones siendo el análisis primero y la posterior aplicación de soluciones los que permitirán eliminar o, al menos reducir los efectos de este mal endémico de la Administración de Justicia, caracterizada por su lentitud, tardanza en sus resoluciones y, en un elevado porcentaje de casos, inoperancia. Lentitud y justicia parecen inseparablemente unidos desde siempre.

Las tardanzas indebidas del procedimiento tienen su origen en causas concretas:

“personales, orgánicas, materiales y legislativas. La creación aventurada de Juzgados sin un análisis previo y realista de necesidades, o creación de los mismos con demora, tras el nacimiento de una “bolsa

⁸⁷ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit.*, p. 256.

⁸⁸ *Ídem.*

de asuntos acumulados sin resolver” así como la dotación insuficiente de Juzgados”⁸⁹.

Thomas Feltes enumera como factores determinantes del retraso, principalmente desde la óptica de las personas intervinientes en el proceso los siguientes⁹⁰:

- El proceder de Jueces y Tribunales, mencionando incluso cómo en algún sistema, vigente en Filipinas, se privaba al Juez de su salario mensual si el mismo no confeccionaba un certificado declarando que había despachado todos los asuntos repartidos al mismo durante los sesenta días precedentes⁹¹.
- Reglamentos de Tribunales y legislación sobre celeridad en los procedimientos.
- Inculcados, víctimas y testigos: si están enfermos o se trata de personas ancianas o no pueden seguir el procedimiento por otras razones, ello provoca retrasos, al igual que cuando las víctimas o testigos vierten testimonios contradictorios o rectifican sus anteriores afirmaciones.
- Fiscal: al tomar decisiones relativas a la inculpación, gravedad del hecho y complejidad, las cuales pueden influir decisivamente en el tipo de procedimiento a seguir y consiguiente retraso.
- Policía: en la búsqueda de pruebas, intervención y coordinación de varios cuerpos.
- Defensa técnica: El Abogado del inculcado puede ejercer una influencia considerable sobre la forma en que un asunto es llevado y sobre la duración del procedimiento.
- Incumplimiento sistemático de plazos y términos procesales.
- La falta de responsabilidad de los intervinientes en la Administración de Justicia.
- Responsabilidad política por deficiencias orgánicas.
- Las llamadas crisis procesales.
- Conducta de las partes implicadas.
- Normas de reparto. Cuestiones de competencia.

⁸⁹ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio; *Dilaciones indebidas... op. cit.*, p. 55.

⁹⁰ THOMAS FELTES, Michael Alex; *Delays in the Criminal Justice System ... op. cit.*, pp. 58 y ss.

⁹¹ Como mecanismo de control similar, el art. 317.3 LOPJ impone a los Presidentes de Sala y Sección y Jueces que cesen en su destino, la obligación de elaborar un “alarde o relación de los asuntos que queden pendientes en el respectivo órgano, consignando la fecha de su iniciación y el estado en que se hallen”, a suscribir por el nuevo titular en caso de conformidad. La infracción de esta obligación aparece tipificada como falta grave en el art. 418.12 LOPJ.

- Configuración actual del proceso.

La doctrina clasifica las respuestas a la conculcación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas con distintos criterios. Así, Vives Antón⁹² habla de soluciones típicas (nulidad, indemnización e indulto) y atípicas (atenuante analógica y abono del exceso de sufrimiento).

Prieto Rodríguez⁹³ analiza hasta 16 posibles soluciones, agrupándolas según como se trate, como remedios en sede judicial, casos de la responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los jueces, y supuestos de indulto, indemnización o neutralización de los beneficios que el Estado obtiene con la tardanza.

A continuación, se hará un breve resumen del contenido más relevante de esas soluciones que nos atañe para el presente tema objeto de estudio

Respecto a los remedios en sede judicial señala la indiscutible responsabilidad del Poder Judicial para la reparación de lesiones de los derechos fundamentales con la atenuación de la pena que corresponda. El Tribunal Supremo Federal norteamericano en las Sentencias U.S. v. Strunk (1972) y Strunk v. U.S. (1973) declaró, una vez reconocida la vulneración del derecho a un juicio rápido, que el daño podía repararse abonando al acusado el período de retraso.

En cuanto a la absolución, una vez acreditada la comisión del delito y la participación en el mismo del acusado, resulta imposible una sentencia absolutoria, posición tratada más adelante en el punto “VII.2.- Interpretación de la redacción legal de la atenuante”.

En la individualización de la pena, es el Legislador quien opta por el sistema de determinación de las penas, quedando a los Jueces y Tribunales un margen para imponer una pena concreta de mayor o menor extensión siempre dentro de la fijada por Ley.

⁹² VIVES ANTÓN, Tomás, Comentarios a la Ley de Medidas ... op. cit. pp. 86-100

⁹³ PRIETO RODRIGUEZ, Javier Ignacio, Dilaciones indebidas... op. cit., pp. 81-115.

Para el indulto, recogido en el art. 4.4 CP atiende a la STS de 10 de julio de 1992, que dice así:

“Si se trata de un delito lejano en el tiempo y juzgado tardíamente como consecuencia de dilaciones no imputables al penado, estaremos ante un primer criterio que puede aconsejar en algunos casos un informe favorable al indulto... y, por ende, la inejecución provisional de la condena”⁹⁴.

Por último, destacaremos la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia dentro de esas 16 soluciones. Para Prieto Rodríguez, el retraso de la Administración de Justicia constituye un supuesto de funcionamiento anormal, ejemplo del deficiente funcionamiento de un servicio público.

El deber de impartir justicia de forma eficaz y dentro de un plazo razonable ha de entenderse como un derecho prestacional cuyo incumplimiento dará lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado quedando obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados cuando no haya posibilidad de reparación *in natura* o, aun siéndolo, haya existido previamente lesión.

A tenor del art. 121 de la Constitución Española:

“Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencias del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.

El art. 292 LOPJ, insiste en esta declaración:

⁹⁴ STS de 10 de julio de 1992. Asúa Batarrita rechaza el recurso al indulto, v. “VII.4.- Compensación de la culpabilidad por el hecho”.

“Los daños causados en cualquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor (...)”.

De la combinación de ambos preceptos y de la regulación establecida en la LOPJ, se desprenden los requisitos necesarios para la reclamación:

- Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, pues no sólo responderá el Estado por actos u omisiones de Jueces o Magistrados, sino también por los llevados a cabo por el Ministerio Fiscal⁹⁵ y los demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
- La producción de un daño efectivo o real, pudiendo evaluarse individual y económicamente.

No debe olvidarse el recurso al Tribunal de Estrasburgo que, a parte de declarar la existencia de la violación del art. 6 CEDH, puede condenar al Estado a indemnizar en los casos del art. 41:

“Arreglo equitativo.

Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.

Cabe recordar la figura del *antejuicio*, que era un juicio previo o preliminar para valorar la admisión de una querella, interpuesta siempre por un particular por la presunta comisión por un Juez o Magistrado de un delito cometido en el ejercicio de su cargo,

⁹⁵ Retraso en calificación.

sirviendo para decidir acerca del derecho a la acción penal y no sobre la pretensión punitiva.

Como expresaba el ya derogado art. 764 LECrim, debía promoverse por escrito, redactado en forma de querella, y debiendo ser firmado por un Letrado. Sin embargo, dicho juicio preliminar sobre la viabilidad de la querella interpuesta contra un Juez o Magistrado fue derogado por la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, por lo que con dicha normativa desapareció la especialidad del antejuicio⁹⁶.

No obstante, en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, volvió a darse nueva redacción al artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente vigente, y que establece lo siguiente:

“En el caso de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese interés en él, formulara querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con carácter previo a la admisión de ésta el órgano competente para su instrucción podrá recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia, así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación”.

VII.- ATENUANTE ANALÓGICA

En Derecho Penal no opera la analogía genérica, a pesar de que el art. 4 del Código Civil, al formar parte del Título Preliminar, afecta a todo el ordenamiento, pues es ese mismo precepto el que en su segundo párrafo, impide la aplicación analógica de las leyes penales a supuestos *“distintos de los contenidos expresamente en ellas”*. Sin embargo, lo anterior no ha sido obstáculo para la introducción de la analogía que beneficia al reo, rechazándose la que le perjudica, en algunos textos, ni para su admisión dogmática.

⁹⁶ *“Quedan derogados el artículo 410 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.*

El artículo 2 del Código Penal de 1928 rezaba que “*no se admitirá la interpretación extensiva, ni tampoco la analogía o semejanza para definir delitos o faltas o agravar las penas*”, lo que, a “*sensu contrario*”, suponía admitir la interpretación extensiva y de la analogía para eximir o atenuar⁹⁷.

El art. 4 del Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1980 admitía expresamente la analogía de los preceptos que favorecieran al reo. Así mismo, el artículo 4 de la Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código Penal de 1983, repetía el texto del Proyecto de 1980.

Como consecuencia de esta declaración de admisión de la analogía beneficiosa con carácter general,

*“...no se contemplaba en el catálogo de las atenuantes la analógica. Por el contrario, sí se regula la atenuante analógica y la análoga relación de afectividad en los textos que desconocen la cláusula general de analogía favorable”*⁹⁸.

Una vez comprendido el significado literal de una norma podemos obtener un indicio de la interpretación final; si el indicio no se confirma teleológicamente, se procedería a la modificación o rectificación, según la finalidad, obteniendo así la interpretación final.

Las siguientes razones que se exponen, afirman que el CP de 1995 prohíbe la analogía en general, favorable o perjudicial⁹⁹:

1. El art. 4.1 y su referencia a los “*casos expresamente comprendidos*” y en el mismo sentido el art. 4.2 CC.

⁹⁷ MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli, *La atenuante analógica de dilaciones indebidas*, Madrid, 2007, p. 25. A este precepto del CP de 1928 se refieren Jiménez de Asua y Antón Oneca (*Derecho Penal. Conforme al Código de 1928. Obra ajustada al Programa de 10 de julio de 1929 para el cuerpo de aspirantes a la Judicatura*), Reus, Madrid, 1929, pp 60-65, considerando que su nueva existencia convertía en repetitivo el art. 3, que contenía la prohibición de perseguir hechos no penados pero dignos de represión (equivalente al actual art. 4.2), precedente del mejor redactado art. 2 CP de 1870. Pero a continuación afirman que el art. 3 sobra “*como precepto normativo de la interpretación penal*”.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 26.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 32.

2. El art. 4.3 y su referencia a la “*rigurosa aplicación*” con posibilidad de indulto, para supuestos concretos de pena excesiva.
3. Los textos de 1980 y 1983 y la enmienda expresamente rechazada durante la tramitación del Proyecto de CP 1995.
4. La existencia de la atenuante analógica expresamente contemplada.
5. La inexistencia de una previsión paralela a la de la retroactividad favorable y su alcance concreto.

VII.1.- Los Acuerdos de los Plenos no Jurisdiccionales del Tribunal Supremo

En principio, se puede debatir si la vulneración del derecho fundamental por la existencia de un retraso innecesario en un procedimiento penal, debe o no repercutir en la situación del que lo sufre y es condenado.

El Tribunal Supremo celebra tres Plenos no Jurisdiccionales de unificación de doctrina como respuesta que debe darse a las dilaciones indebidas en el proceso penal. Dichos acuerdos exponen lo siguiente:

1º) **Acuerdo de 2 de octubre de 1992.** El Pleno tuvo lugar bajo la vigencia del CP de 1973. El planteamiento se fundó en cómo proceder cuando en un recurso de casación se denunciaba la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, acordándose por mayoría, que

*“las dilaciones indebidas sirven de fundamento para solicitar la concesión de un indulto y la indemnización correspondiente por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”*¹⁰⁰.

¹⁰⁰ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit.*, p. 253, en virtud del art. 121 CE y la LOPJ.

En esta Junta se discutió si las dilaciones indebidas podían dar lugar a una atenuante analógica, pero la propuesta en este sentido obtuvo menos votos que la finalmente acordada.

2º) **Acuerdo de 29 de abril de 1997.** La Junta se celebró bajo la vigencia del CP de 1995. La mayoría concluyó que si en el recurso de casación se alega la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y se constata esa vulneración,

“el motivo casacional ha de ser estimado, sin pronunciamiento de segunda sentencia, sin condena en costas y con los pronunciamientos pertinentes sobre petición de indulto y suspensión de la pena, en tanto se tramita el indulto (art. 4.4 CP)”¹⁰¹.

Se vuelve a plantear la cuestión de la atenuante analógica, descartándose por falta de base legal, postergando su estudio a futuras reuniones.

3º) **Acuerdo de 21 de mayo de 1999.** Se acordó que la solución jurisdiccional a la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, previamente invocada, era la de compensarla con la penalidad, lo que debía hacerse con la atenuante analógica del art. 21.6 CP. Se razonaba que:

“si la Ley compensa las pérdidas legítimamente ocasionadas por el Estado en el curso de un proceso penal, es también evidente que con más razón debe proceder de la misma manera cuando la lesión jurídica no está justificada... la lesión de un derecho personal del acusado, por tanto, tiene que ser abonada por el Tribunal en la determinación de la pena, pues, como se dice en la doctrina moderna “mediante los perjuicios anormales del procedimiento, que el autor ha tenido que soportar, ya ha sido en parte penado”¹⁰².

También se estableció, sobre la base del art. 4.4 CP, que el hecho de no existir dilaciones no es presupuesto de validez del proceso, así como de la sentencia condenatoria, debiendo de partir del valor de dicha resolución, a pesar de las dilaciones indebidas.

¹⁰¹ *Ibídem*, p. 257 y MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli, *La atenuante analógica... op. cit.*, p. 157.

¹⁰² *Ibídem*, p. 258 y p. 158 respectivamente.

VII.2.- Interpretación de la redacción legal de la atenuante

Se ubica en el número 6º del artículo 21 del Código Penal una nueva circunstancia atenuante que reza:

“La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa”¹⁰³.

El punto de partida para su interpretación lo marca la STS de 9 de febrero de 2011 que recoge la necesidad de dejar de operar con reglas estandarizadas para pasar a adaptadas a cada caso en concreto:

“El nuevo precepto exige, de forma expresa, la concurrencia de una serie de requisitos: a) una dilación indebida en la tramitación del procedimiento; b) que esa dilación sea susceptible de ser calificada como extraordinaria; c) que no sea atribuible al propio inculpado y d) que el retraso no guarde proporción con la complejidad de la causa

No resulta fácil, desde luego, colmar el significado indeterminado de algunos de los vocablos empleados por el legislador. El carácter indebido, la naturaleza extraordinaria de la dilación y, en fin, la propia complejidad de la causa, no son conceptos susceptibles de fijación apriorística. La necesidad de operar con reglas no estandarizadas, sino adaptadas al caso concreto, se hace todavía más visible a raíz de la reforma operada por la LO 5/2010 de 22 de junio”.

Como bien recuerda Toscano Tinoco,

¹⁰³ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE de 24 de noviembre de 1995), art. 21.6.

*“la concurrencia de deficiencias estructurales que expliquen las tardanzas no alcanza a justificar el incumplimiento estatal de dispensar tutela judicial en plazo razonable”*¹⁰⁴.

Así mismo,

*“cuando la reparación exigible por razón de la dilación sea la disminución de la pena imponible, las exigencias han de ir más allá de las reclamables cuando se trata de acudir a otros remedios de la vulneración constitucional”*¹⁰⁵.

Dicho sea, que la posibilidad de absolver a un culpable porque haya sufrido dilaciones indebidas resulta prácticamente imposible. Esto carecería de sentido ya que, una vez probada la culpabilidad de la persona, cuyo proceso haya sido objeto de retardo, y éste no fuera condenado, la absolucióón sería incomprensible. Sería comprensible en caso de probarse la inexistencia de la comisión de un delito por parte del sujeto que ha sufrido el retardo en el proceso o si no fuera posible probar su responsabilidad.

Bacigalupo Zapater fue claro en este sentido en la STS de 14 de diciembre de 1991:

“la comprobación de dilaciones indebidas en el proceso penal no debe conducir a la absolucióón del acusado, a no ser que por la paralización o inactividad procesal se produzca la prescripcióón del delito perseguido, debiendo, sin embargo, tenerse en cuenta dichas dilaciones al momento de determinar la pena aplicable, mediante la correspondiente atenuación o rebaja”.

Señala Manjón-Cabeza Olmeda que *“Admitir la atenuante analógica de dilaciones indebidas equivale a tomarse el principio de legalidad a beneficio de inventario”*¹⁰⁶.

¹⁰⁴ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit.*, p.277.

¹⁰⁵ *Ídem.*

¹⁰⁶ MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli. *La atenuante analógica ...op. cit.* p.355

VII.3.- Apreciación de la atenuante en la modalidad de muy cualificada

El Tribunal supremo considera que la atenuante por retraso en la tramitación de una causa penal tendrá la consideración de muy cualificada cuando las paralizaciones se hayan producido con notable intensidad o tengan especial consideración durante varios años.

La pena será reducida conforme a las reglas establecidas en el art. 66 CP. Si dicho retardo en la tramitación del proceso tiene una consideración notable, podrá ser apreciada la atenuante como muy cualificada, cuyo resultado será una mayor reducción de la pena respecto a la estimación de la misma atenuante de dilaciones indebidas con carácter de simple.

La Sentencia de 16 de abril de 2014, dictada por la Audiencia Provincial de la Rioja señaló cómo

“Un proceso penal carente de complejidad alguna, se ha prolongado durante más de cinco años, con periodos de un año de duración en los que no se ha llevado a cabo ninguna actuación procesal. En tales circunstancias, debe apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada”.

Se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de abril de 2014 respecto al plazo de duración para apreciar la atenuante de dilaciones indebidas:

“(…) esta Sala tiene establecido en resoluciones precedentes que la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse unas veces en la condición de simple y otras en la de especialmente cualificada, atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del art. 21. 6º del C. Penal.”

El Tribunal Supremo ha señalado, en diversos pronunciamientos plazos irrazonables como puedan ser:

- Nueve años de duración del proceso penal: SSTS de 8 de mayo de 2003 y de 21 de mayo de 2002.
- Ocho años: STS de 3 de marzo de 2003.
- Siete años: SSTS de 15 de 1 de febrero de 2010, de 16 de abril de 2010 y de 2 de junio de 2010.
- Cinco años y medio: STS de 29 de septiembre de 2008.
- Cinco años: STS de 20 de mayo de 2010.

La SAP de León de 25 de abril de 2014, estima la atenuante simple y no como muy cualificada debido, precisamente, a que el tiempo que transcurre desde que se inicia el procedimiento en 2008 hasta que se celebra el juicio oral en 2013 no llegó a los cinco años “...*casi cinco años, ha sido excesivo y no guarda proporción con la complejidad del asunto*”.

La reciente STS de 4 de marzo de 2020 se pronuncia sobre esta cuestión en un caso en que la causa había estado paralizada sin justificación varios períodos de tiempo que sumaban más de 1 año.

En este caso el acusado solicita en su recurso que se aprecie la atenuante por dilaciones indebidas en su modalidad de muy cualificada, siendo desestimado por el tribunal y aplicando la atenuante simple de dilaciones indebidas del artículo 21.6 CP, al considerar que la dilación no alcanzaba una intensidad superior a la normal de la respectiva circunstancia y, por ende, extraordinaria:

“Las acusaciones configuraron dicha atenuante como simple. La defensa (...) la reclama como muy cualificada. Optamos por darle la razón a las acusaciones. La dilación ha sido evidente y palmaria, y la mayor se produce a la espera de hueco en la agenda programada de señalamientos para el comienzo de la vista, no lo desconocemos, como tampoco olvidamos que las consecuencias de la sobrecarga de trabajo que soportan los tribunales suelen jugar a favor de quienes son acusados, por mucho que la pena de banquillo sea deleznable, en cuanto

acaba determinando una rebaja en las pretensiones punitivas de las acusaciones.

Sin embargo, en el caso debe ser admitida con el carácter de simple y no de muy cualificada, pues no alcanza una intensidad superior a la normal de la respectiva circunstancia, que ya incluye, en su literalidad, la adjetivación de extraordinaria”.

La desestimación se fundamentaba en los requisitos exigidos para su aplicación, que fueron los mismos que los mencionados anteriormente en la STS de 9 de febrero de 2011:

- a) que tenga lugar una dilación indebida y extraordinaria;
- b) que ocurra durante la tramitación del procedimiento;
- c) que esa demora o retraso injustificado no sea atribuible al investigado y
- d) que la dilación no guarde proporcionalidad con la complejidad del litigio.

De otro lado, en las sentencias de casación, la atenuante como muy cualificada se aplica en causas que se celebran en un periodo que supera los ocho años de demora, aproximadamente, entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio¹⁰⁷.

VII.4.- Compensación de la culpabilidad por el hecho

Para Asúa Batarrita la ordenación del impulso inmediato de la causa es la forma más lógica para reparar el derecho vulnerado y para cesar esas dilaciones ilegítimas, pues rechaza el recurso al indulto.

Pero ¿qué ocurre si el derecho vulnerado no puede ser restituido?

¹⁰⁷ STS de 21 de abril de 2014, “Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias de 3 de marzo de 2003 (8 años de duración del proceso); 8 de mayo de 2003 (9 años de tramitación); 21 de marzo de 2002 (9 años); 15 de enero de 2007 (10 años); 12 de diciembre de 2008 (15 años de duración); y de 30 de enero de 2013 (8 años).”

“Cuando es imposible restituir el derecho lesionado, procedería declarar la nulidad de la causa si las dilaciones repercuten en la regularidad del procedimiento”¹⁰⁸.

Dar con el remedio adecuado a las dilaciones en un proceso no es únicamente lo importante, sino que tales soluciones *“no deberían suponer que una dilación se suma a otra, es decir, no puede, para declararse que se ha vulnerado ese derecho, darle a la víctima más de lo mismo”¹⁰⁹.*

Toscano Tinoco nombra dos tipos de compensación como son la constructiva y la destructiva:

A) Compensación constructiva

La compensación constructiva tendría correspondencia con las circunstancias atenuantes de confesión de la infracción y de reparación del daño del art. 21 del CP.

En relación con ellas, se señala que:

“pese a que la cuestión no es pacífica en la doctrina, existe un sector que defiende que la atenuante de confesión de la infracción facilita la tarea de la administración de justicia, lo que constituye, a su vez, el fundamento de la misma, pues hace más fácil la aplicación coactiva de la ley y por tanto, razones de mayor efectividad de la norma penal legitiman la existencia de la misma. Por su parte, en el caso de reparación del daño, existen diversos pronunciamientos sobre el fundamento de la circunstancia, desde la atención a los intereses de la víctima a la menor necesidad de pena. Desde la perspectiva de la protección de bienes jurídicos, como fin del Derecho Penal, esa

¹⁰⁸ ASÚA BATARRITA, Adela, *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos (Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López)*, Granada, 1999, p. 243.

¹⁰⁹ MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli, *La atenuante analógica ...op. cit.* p. 151.

reparación ayudaría a la protección del bien jurídico, por suponer un comportamiento dirigido a suprimir los efectos de su lesión”¹¹⁰.

Como se puede observar no hay relación alguna entre las circunstancias atenuantes encuadradas en la compensación constructiva con las dilaciones indebidas ocurridas en el seno de un procedimiento, salvo que ambas aparecen tras la comisión del hecho punible¹¹¹.

B) Compensación destructiva

Se identifica con una pérdida de derechos como consecuencia de la comisión de un delito y el proceso al que éste da lugar. Se alude en la sentencia del TS, de 8 de junio de 1999 al art. 58 del Código Penal, en el que se ordena abonar para el cumplimiento de la pena el tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente.

Igualmente, referencia al art. 59 del Código Penal, que dispone la compensación de la pérdida de derechos ya sufrida por las medidas cautelares mediante su abono en la pena, cuando éstas sean de naturaleza distinta de la pena impuesta¹¹².

VIII.- ALGUNOS DATOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR EL ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

El artículo 121 de la CE, establece: *“los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencias del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a ley”*.

Podríamos considerar, como anormal funcionamiento de la justicia, aquel daño que se ha producido por parte del Estado a consecuencia de una insuficiencia o falta de medios materiales o personales en el ejercicio de la actividad judicial.

¹¹⁰ TOSCANO TINOCO, Juan José, *Las Dilaciones indebidas... op. cit.*, pp. 260-261.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 261.

¹¹² *Ibidem*, p. 262.

“La existencia de dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos judiciales puede configurar, efectivamente, un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”¹¹³.

Por lo tanto, las dilaciones indebidas son consideradas como un perjuicio causado por el anormal funcionamiento de la administración de justicia.

“La existencia de un daño para ser indemnizable ha de ser real y efectivo, no traducirse en meras especulaciones o expectativas, incidiendo sobre derechos e intereses legítimos evaluables económicamente y cuya concreción cuantitativa o las bases para determinarla puedan materializarse en ejecución de sentencia, de manera que permitan una cifra individualizada en relación con una persona, como consecuencia del daño producido por la actividad de la Administración en relación de causa a efecto, probando el perjudicado la concurrencia de los requisitos legales para que surja la obligación de indemnizar”¹¹⁴.

Es decir, para que los daños puedan ser resarcidos por la administración es necesario que sean económicamente evaluables, la indemnización será consecuencia directa del perjuicio causado por las dilaciones en el procedimiento.

Ejemplo de ello son las, SSAN 3650/2018, de 18 septiembre, Rec. 432/2017 y 2908/2019 de 9 de julio, Rec. 433/2017, por las que se reconoce a la parte demandante una indemnización por el perjuicio causado a consecuencia de la tardanza en la tramitación del procedimiento, quedando así recogido en la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, de 18 septiembre. 2018, Rec. 432/2017;

“Reconociendo el derecho del demandante a percibir en concepto de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de

¹¹³ SAN de 15 de enero de 2020.

¹¹⁴ STS de 6 de julio de 1999, Rec. 397/1996.

Justicia la cantidad de 42.000 euros (que se añaden a los 10.000 € reconocidos por la Administración), así como los intereses legales devengados desde la fecha de la reclamación administrativa el 5 de junio de 2014, y, en su caso, los intereses a que se refiere el artículo 106.2 de la LJCA (LA LEY 2689/1998)”.

Por el contrario, la Sección 3ª, de la referida Sala, en la SAN 257/2020 de 15 de enero, Rec. 1002/2018, desestima el recurso planteado por la defensa, al considerar que, no quedan suficientemente probadas las dilaciones indebidas, como se hace constar en el Fundamento de Derecho Quinto:

“1.- La parte demandante no ha procedido en los términos indicados, mediante una exposición detallada de las dilaciones y sus circunstancias, limitándose a indicar que la duración total de la causa fue de 2 años y que las actuaciones eran muy voluminosas en razón de su extensión física. Estas alegaciones son insuficientes ya que seguimos sin conocer si a la vista de las circunstancias de la causa - complejidad, número de intervinientes, diligencias practicadas y naturaleza de las mismas, etc.- o el comportamiento de las partes y las autoridades en el seno del litigio. Carecemos de estos elementos de juicio que son indispensables para articular con éxito la demanda y obtener el pronunciamiento condenatorio que se postula por funcionamiento anormal.

2.- El demandante, por su condición de investigado o imputado, debe soportar las consecuencias naturales del proceso, pero no los casos de funcionamiento anormal (dilaciones indebidas); " Ahora bien, la parte actora, precisamente por su posición institucional en el procedimiento, tenía la carga de llevar al Tribunal a través de las correspondientes alegaciones y pruebas la convicción acerca de la existencia de las dilaciones indebidas que denunciaba”. (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 12 mayo 2011, rec. 398/2009)”.

Por lo tanto, para que sea declarada la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal (dilaciones indebidas, en este caso), no es suficiente con la prolongación en el tiempo de la tramitación del procedimiento, sino que es necesario, probar, que el retraso es injustificado y que se ha producido un daño cuantificable económicamente, susceptible de indemnización.

Es de relevancia que en los últimos veinte años las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia han ido incrementándose. En 2002 se publicó por parte de la Comisión de Estudios e Informes, del Consejo General del Poder Judicial, un estudio recopilando datos, entre 1998 y 2002 sobre las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. De dicho trabajo se puede extraer que durante esas fechas se cursaron un total de 1914 reclamaciones, de las cuales 701 fueron a consecuencia de un retraso injustificado. Siendo en el ámbito de la jurisdicción penal donde más expedientes se tramitaron a consecuencias de las dilaciones indebidas¹¹⁵.

Otro informe publicado en 2019 por el Defensor del pueblo, en relación con la responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, nos dice:

“Las dilaciones indebidas son uno de los supuestos de funcionamiento anormal. En el período 2000-2018 se han incoado 6.128 expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la justicia, un mínimo de 191 y un máximo de 436 por año. El tanto por ciento de resoluciones estimatorias oscila entre el 10,01 y el 30,67 % por año. Ha de precisarse que las dilaciones indebidas, como se ha dicho, no son la totalidad de los supuestos de funcionamiento anormal sino solo una parte, probablemente la más significativa”¹¹⁶.

¹¹⁵ Anexo C.4. Comisión de Estudios e Informes (especial referencia a la responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento) CGPJ, Madrid, 2002, pp.389-390.

¹¹⁶ Informe anual del Defensor del Pueblo 2018 - Vol. II Estudios y documentos de trabajo, Madrid, 2019, p. 172.

La excesiva recurrencia al litigio por parte de la ciudadanía se pone de manifiesto en los datos que ofrece el Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial¹¹⁷.

Se pueden considerar datos muy preocupantes, ya que cada año ha ido aumentando el número de expedientes tramitados por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, siendo en el ámbito de la jurisdicción penal donde más se produce. Se desprende de dicho informe que, aunque las dilaciones indebidas no son la totalidad de los supuestos, sí es la parte más significativa, sorprendente cuando se trata de la vulneración de un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución con una especial protección.

De dicho informe se extraen los siguientes datos que se han considerado de interés para el presente trabajo;

“El retraso en la ejecución de una sentencia penal puede ser queja ante el Defensor del pueblo.

En un primer momento la queja formulada por dilaciones en la jurisdicción penal, que puede parecer justificada por la duración del procedimiento, se desvirtúa al recibir el informe del ministerio fiscal que acredita que la duración de la tramitación del proceso trae causa en su complejidad, sin que por ello existan dilaciones indebidas o injustificadas.

En algunas quejas se produce la normalización del procedimiento, una vez admitida la queja y solicitado informe por el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo ha constatado, en no pocas ocasiones, que las demoras se deben a problemas estructurales del órgano judicial, sin que exista una responsabilidad del titular o del personal del juzgado”.

Por tanto, las dilaciones indebidas pueden ser motivo de queja ante el propio Defensor del Pueblo. Habiendo sido apreciado por éste, que una de las causas de la demora, podría

¹¹⁷ Anexo nº 1.

estar en la falta de medios personales y estructurales de la propia Administración de Justicia.

A priori parecería tener una fácil solución, con la dotación de un mayor número de trabajadores, medios técnicos y de infraestructuras, pero los datos de los últimos años muestran que en vez de ir reduciéndose, hay un incremento en la tramitación de expedientes por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, por lo que se podría considerar que las medidas adoptadas para solventar este problema, no están siendo eficaces o son insuficientes, para solventar este grave problema que conlleva la vulneración del art. 24.2 de nuestra Constitución.

IX.- CONCLUSIONES

PRIMERA. - A lo largo de todo lo expuesto en este trabajo, se ha podido observar como gran parte de la causa de la tardanza indebida viene motivada por la falta de responsabilidad del Estado, ya sea a través de las autoridades judiciales o por la pasividad del Ministerio Fiscal, bien por medio de la insuficiencia en los medios personales y materiales en los distintos Juzgados o Tribunales, así como la colaboración tan deficiente de las restantes administraciones.

SEGUNDA. - El distanciamiento en el tiempo desde la fecha de la comisión del delito, al cumplimiento de la pena, acarrea efectos perjudiciales, desde el marco de la prevención general como en la prevención especial. Una justicia tardía equivale con frecuencia a una justicia ineficaz.

TERCERA. - La solución legal que hoy en día ofrece la doctrina a esta vulneración, parte de la premisa de si una causa está llamada a tramitarse en un plazo razonable, una vez transcurre un plazo irrazonable, no se puede volver atrás y, por tanto, será irreversible la lesión que se haya producido. Desde ese momento, queda la compensación de la lesión, pero no podrá otorgarse una reparación o restitución del derecho fundamental que haya sido lesionado.

CUARTA. - Se debe tener en cuenta, que en el proceso penal no solamente se está juzgando a una persona, sino que también se debe proporcionar la compensación a sus víctimas.

QUINTA. - La regulación que la Ley Orgánica 5/2010 hace introduciendo como atenuante de la responsabilidad penal del condenado, no termina de dar la cobertura legal que merecen las dilaciones indebidas, en cuanto derecho fundamental, pues sólo se aprecia una visión fragmentada del problema ciñéndose a la posición que ocupa el condenado y las consecuencias que sobre él pudieran tener las dilaciones, esquivando los efectos que igualmente pueden sufrir otras partes intervinientes en el proceso, como pueden ser la parte acusadora (sea o no víctima) y el acusado absuelto.

SEXTA. - Un tratamiento lo más analógico posible respecto de todas las personas que pudiesen ocupar la posición de sujetos pasivos como intervinientes en el proceso, sería lo más adecuado para no eludir ninguna parte en un proceso con dilaciones indebidas que pudieran ver afectado su derecho.

SÉPTIMA. - Teniendo en cuenta la doctrina constitucional en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se exige que las causas penales se tramiten en un plazo razonable sin sufrir dilaciones indebidas.

OCTAVA. - Darle al procedimiento el carácter de preferente y urgente a la reactivación del desarrollo del mismo sería un equilibrio a la paralización prolongada de las actuaciones, pues desde ese instante, las fases procesales que suceden serían desarrolladas con mayor celeridad respecto a la normal en el resto de los procedimientos desde la instrucción hasta el enjuiciamiento, compensándose de este modo la tardanza anterior.

NOVENA. - La solución a las cuestiones que plantea el retraso en la Administración de Justicia se enmarcaría en el esfuerzo presupuestario y organizativo del Estado.

DÉCIMA. - El fomento de medios alternativos de solución de conflicto, la adecuada técnica en la elaboración de normas y una buena praxis por parte de las administraciones reducirían notoriamente el tiempo de respuesta y la tramitación de los procesos. Por eso, es tarea de todas las administraciones públicas el perfeccionamiento de su actividad.

Y hay que ver lo que duran los procesos en los últimos tiempos.

(El proceso de Franz Kafka)

X.- BIBLIOGRAFÍA

- CEREZO MIR, J. 1999, *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos: Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López*, Granada. Edit. Comares.
- DÍAZ DELGADO, J. 1987, *La responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas en el funcionamiento de la Administración de Justicia*, Valencia. Edit. Siete.
- FERNÁNDEZ VIAGAS BARTOLOMÉ, P. 1993, *Las dilaciones indebidas en el proceso de su incidencia sobre la orientación de las penas hacia la reeducación y reinserción social*. Revista del Poder Judicial nº. 24.
- GARBERÍ LLOBREGAT, J. 2009, *Constitución y Derecho Procesal. Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal*, Madrid. Edit. Civitas.
- GIMENO SENDRA, V. 1989, *Derecho Procesal. Tomo II: Proceso Penal*, (obra colectiva), Valencia. Edit. Tirant Lo Blanch Derecho.
- LAFFARGUE, B. y GODEFROY, T. 1989, *La situation dans les pays européens du point de une des lenterus de la justice en ce que concerne les adultes*. En obra colectiva «Lenteurs danse le systeme de justice pénale», Estrasburgo.
- MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. 2007, *La atenuante analógica de dilaciones indebidas*, Madrid. Edit. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad.
- MORENO MILLÁN, C. 1993, *El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas*. Revista Procuradores, marzo-abril.
- PRIETO RODRIGUEZ, J.I. 1997, *Dilaciones indebidas y Derecho Penal (causas y remedios. Crítica a las soluciones Jurisprudenciales arbitrales)*, Madrid. Edit. Akal.

- REQUEJO PAGÉS, J.L. 1989, *Constitución y Proceso*, de Vicente Gimeno Sendra, Revista Española de Derecho Constitucional, nº25.
- ROMERO COLOMA, A.M. 1993, *El artículo 24 de la Constitución Española: análisis y valoración*, Barcelona. Edit. Serlipost.
- THOMAS FELTES, M.A. 1992 *Delays in the Criminal Justice System – Causes and Solutions*. Council of Europe, *Criminological Research*, Vol. XXVIII, Estrasburgo.
- TOSCANO TINOCO, J.J. 2013, *Las Dilaciones indebidas: una cuestión no resuelta. Evolución jurisprudencial, regulación legal y visión crítica*, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, nº X.
- VIVES ANTON, T.S. 1992, *Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. II. La Reforma del Proceso Penal*. Valencia. Edit. Tirant lo Blanch.

XI.- LEGISLACIÓN

- Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, BOE de 27 de julio de 1889.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, BOE de 30 abril de 1977.
- Real Decreto de 14 de septiembre, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE de 17 de septiembre de 1977.
- Constitución Española, BOE de 29 de diciembre de 1978.
- Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, BOE 5 de octubre de 1979.

- Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en Roma de 4 de noviembre de 1950, BOE de 10 de octubre de 1979.
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial BOE de 2 de julio de 1985.
- Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, BOE de 23 de mayo de 1995.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, BOE de 24 de noviembre de 1995.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE de 08 de enero de 2000.
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, BOE de 30 de marzo de 2010.

XII.- JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

- STC de 23 de enero de 1985
- STC de 4 de julio de 1988
- STC de 24 de noviembre de 1988
- STC de 31 de enero de 1994

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- STEDH de 27 de junio de 1968, caso Wemhoff.
- STEDH de 15 de julio de 1982, caso Eckle
- STEDH de 10 de diciembre de 1982, caso Coridiano
- STEDH de 13 de julio de 1983, caso Zimmerman y Steiner.
- STEDH de 10 de julio de 1984, caso Guincho
- STEDH de 10 de octubre de 1984, caso Guindo

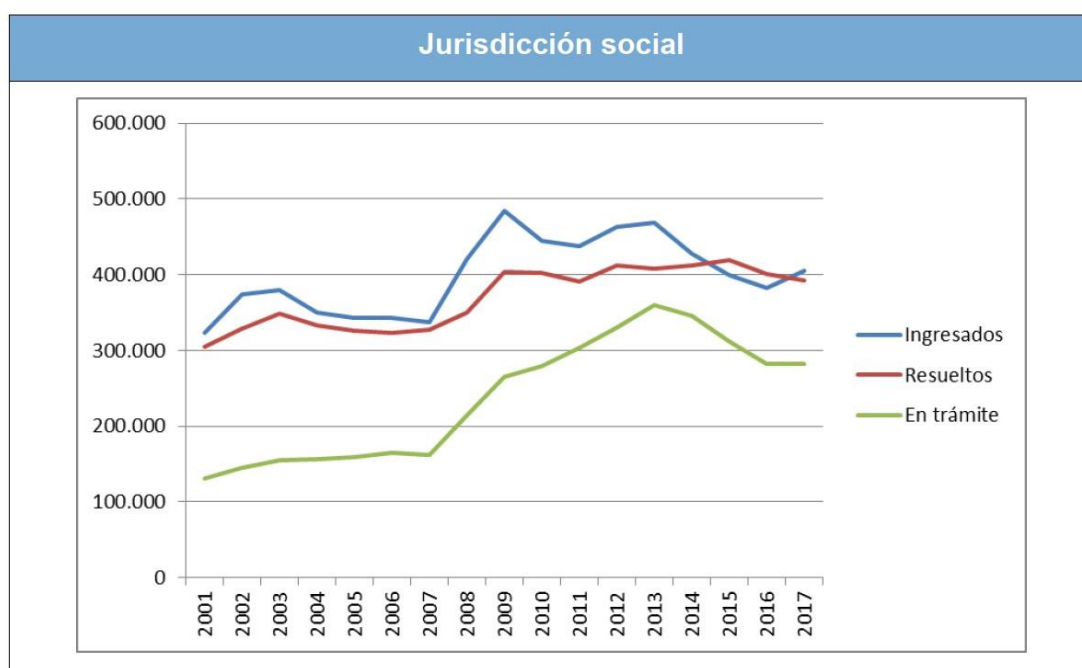
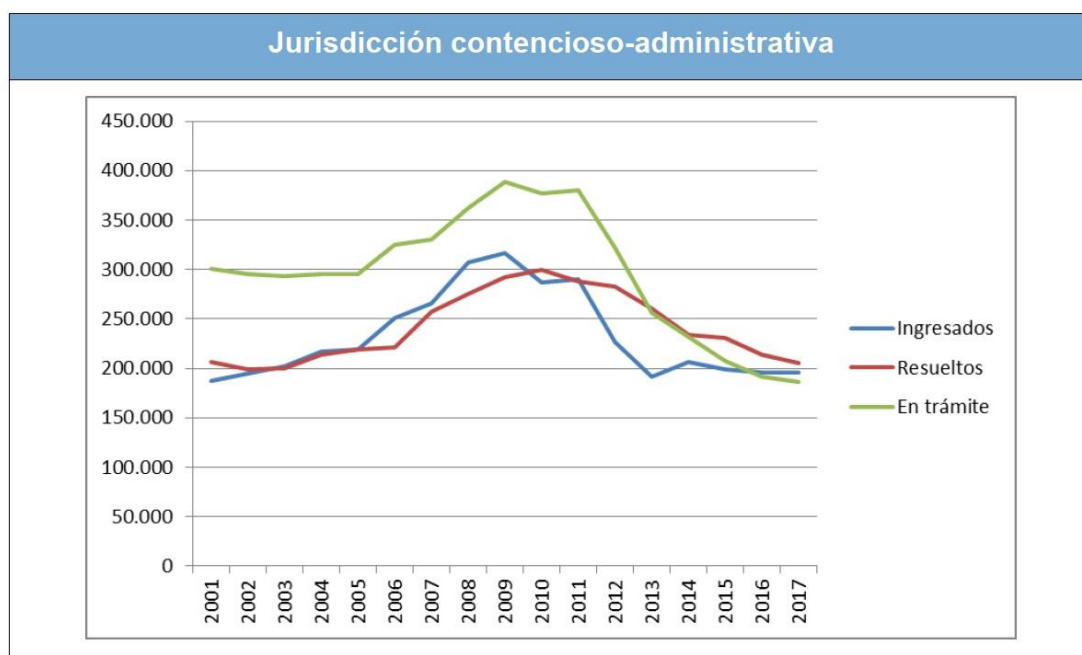
- STEDH de 25 de junio de 1987, caso Baggetta.
- STEDH de 27 junio de 1988, caso Neumeister
- STEDH de 7 de julio de 1989, caso Sanders
- STEDH de 23 de octubre de 1990, caso Moreira de Azevedo
- STEDH de 19 febrero de 1991, caso Girolani

Tribunal Supremo

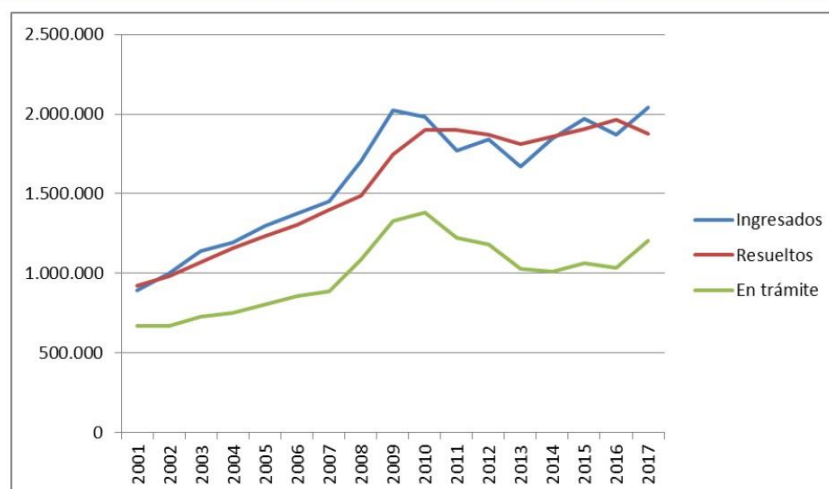
- STS de 14 de diciembre de 1991
- STS de 7 de octubre de 1992
- STS de 20 de septiembre de 1993
- STS de 27 de enero de 1997
- STS de 1 de febrero de 2011
- STS de 9 de febrero de 2011
- STS de 4 de marzo de 2020

XIII.- ANEXO I

Memoria 2017 del Consejo General del Poder Judicial.



Jurisdicción civil



Jurisdicción penal

